



00000073

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Guatemala, 5 de julio de 2013

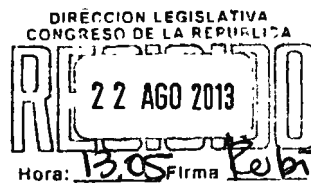
Licenciada

Ester Velázquez Sagastume

Directora Legislativa

Congreso de la República

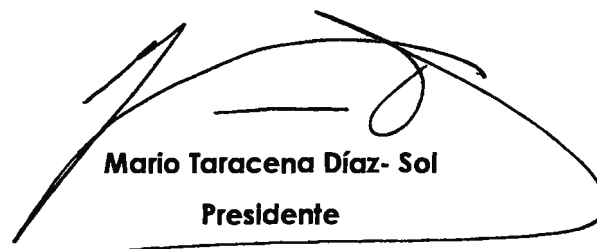
Su Despacho



Licenciada:

De manera atenta me dirijo a usted para manifestarle que por este acto entrego el **Dictamen Favorable**, de la iniciativa 3736 denominada **"Convención Internacional para la Protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas"**. Y para los efectos correspondientes adjunto original.

Atentamente,


Mario Taracena Díaz- Sol
Presidente

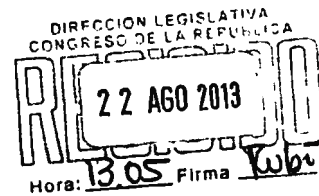


00000074

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DICTAMEN

Honorable Pleno



Con fecha doce de diciembre del año dos mil siete, el Honorable Pleno del Congreso de la República conoció y remitió a la Comisión de Relaciones Exteriores para su estudio y dictamen, la iniciativa de ley identificada con el número de registro 3736 de la Dirección Legislativa, presentada por el Organismo Ejecutivo a través del Presidente de la República. Dicha iniciativa dispone la aprobación de la " **Convención Internacional para la Protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas** " suscrita por la República de Guatemala el seis de febrero del año dos mil siete en la ciudad de París, Francia.

Antecedentes

Los altos impactos humanitarios ocasionados por la segunda guerra mundial y sus consecuencias en la vida de millones de personas, dio lugar al establecimiento de mecanismos de protección de las personas y sus derechos. El crecimiento del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los diversos mecanismos universales y regionales, así como la creciente conciencia mundial sobre la protección de todas las personas dio como resultado las diversas categorías de normas *ius cogens* entre las cuales se destaca la desaparición forzada de las personas.

DICTAMEN FAVORABLE INICIATIVA 3736





00000075

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Los diversos mecanismos universales y regionales de protección de los derechos humanos de las personas, a través de sus informes, sentencias, resoluciones, pronunciamientos y recomendaciones muestran que la comunidad internacional promueve, día a día, que cada Estado en el mundo adopte los diversos instrumentos internacionales, universales y regionales, que promueven mecanismos a lo interno de los Estados para proteger a las personas contra la desaparición forzada.

El derecho internacional de los derechos humanos considera que la desaparición forzada es una de las formas más graves de violación a los derechos humanos. Se considera que constituye una violación de múltiples derechos al ser humano, tanto de las personas desaparecidas como de los miembros de su familia. El conjunto de derechos que se protege al incorporarse los instrumentos internacionales de derechos humanos incluye una protección extensa a la libertad, la seguridad, la integridad personal, la vida y la personalidad jurídica. En el mismo sentido, El Comité Internacional de la Cruz Roja al respecto de las normas consuetudinarias de derecho internacional humanitario incluye la regla 98 que establece que la desaparición forzada está prohibida por el derecho internacional humanitario.

El Estado de Guatemala, miembro de la comunidad internacional, impulsor de diversos mecanismos e instrumentos internacional en derechos humanos, ha dado pasos importantes en materia legislativa para la protección de las personas contra la desaparición forzada. Así, el Honorable Congreso de la República ratificó en mil novecientos noventa y seis la convención interamericana sobre desaparición forzada, incorporando los mecanismos





00000076

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

regionales de protección. Sin embargo, la misma dinámica de desarrollo constante del derecho internacional del derecho humano y humanitario, ha tenido la aprobación de un reciente instrumento en materia de desaparición forzada el cual fue aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2006. La **Convención Internacional para la Protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas**, constituye el más reciente instrumento universal de protección a todas las personas contra la desaparición forzada, de tal cuenta, el Estado de Guatemala lo suscribió en el año 2007, dando un claro mensaje de que la República sigue comprometida con el avance de los derechos humanos y del derecho humanitario.

De la Convención Internacional para la Protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas:

La Convención internacional fundamenta su contenido en instrumentos internacionales, como: a) la Carta de las Naciones Unidas; b) la Declaración Universal de Derechos Humanos; c) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; d) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; e) la Declaración sobre protección de las personas contra la desaparición forzada de las Naciones Unidas en su resolución 47/133 de 1992; y f) los instrumentos del derecho internacional humanitario de los cuales Guatemala es Estado Parte.

La convención establece la obligación de los Estados partes para la toma de medidas administrativas, judiciales y legislativas que desarrollen los mecanismos idóneos de protección. Esto conlleva el crear o establecer





00000077

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

procesos formativos para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y funcionarios encargados de la justicia. De igual forma, regula la incorporación de las medidas necesarias para contar con un registro de personas que se reporten como desaparecidas y mecanismos efectivos de búsqueda.

La convención se divide en tres fracciones, la primera sección trata sobre lo que conlleva el delito de desaparición forzada, la segunda parte regula a la entidad encargada de velar por la aplicación del convenio, y la última parte trata de la vigencia y métodos de solución respecto a la interpretación del convenio por los Estados Parte.

Se entiende por "desaparición forzada: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley." Cada Estado Parte deberá tipificar el delito dentro de su legislación penal; este constituye un delito de lesa humanidad.

Se entenderá por "víctima" a la persona desaparecida y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de una desaparición forzada. Y se considera penalmente responsables a toda persona que cometa, ordene, o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla, sea cómplice o participe en la misma.





00000078

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Para los Estado Parte que aplique un régimen de prescripción al delito, tomará las medidas necesarias para que el plazo de prescripción se cuente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, habida cuenta del carácter continuo de este delito. Además los Estados Parte velarán para que las autoridades competentes dispongan de las facultades y recursos necesarios para llevar a cabo eficazmente la investigación; consecuentemente cada Estado Parte tomará las medidas necesarias para prevenir y sancionar los actos que obstaculicen el desarrollo de las investigaciones.

El delito no será considerado como delito político, conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos, por lo que una solicitud de extradición fundada en un delito de este tipo no podrá ser rechazada por este único motivo.

Respecto a la extradición, los Estados Partes se comprometen a incluir el delito entre los hechos delictivos susceptibles de extradición en todo tratado de extradición que celebren con posterioridad; al igual que este tratado puede ser considerado como base jurídica para un Estado que subordine la extradición a la existencia de un tratado.

Asimismo los Estados Partes se prestarán todo el auxilio judicial posible en lo que respecta a cualquier procedimiento penal relativo a un delito de desaparición forzada, inclusive el suministro de todas las pruebas necesarias para el proceso, éste auxilio estará subordinado a las condiciones previstas en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los tratados de cooperación judicial aplicables.





00000079

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

En lo que respecta a la privación de libertad, los Estado Parte establecerán en su legislación las condiciones bajo las cuales pueden impartirse las órdenes de privación de libertad; determinarán las autoridades facultadas para ordenar privaciones de libertad; el mantenimiento de la persona únicamente en lugares oficialmente reconocidos y controlados; al igual que el derecho de la persona privada de libertad a comunicarse con su familia, un abogado o cualquier otra persona de su elección y a recibir su visita, y en el caso de un extranjero, a comunicarse con sus autoridades consulares. Por lo que además se asegurará el establecimiento y el mantenimiento de uno o varios registros oficiales y/o expedientes actualizados de las personas privadas de libertad.

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas apropiadas para la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, para la búsqueda, el respeto y la restitución de sus restos. Asimismo los Estado Parte velarán por que su sistema legal garantice a la víctima de una desaparición forzada el derecho a la reparación y a una indemnización rápida, justa y adecuada, que comprenda todos los daños materiales y morales, al igual que otras modalidades de reparación tales como: la restitución; readaptación; satisfacción y garantías de no repetición.

La segunda parte de la convención trata de la constitución de un Comité contra la Desaparición Forzada, el cual está integrado por diez expertos en derechos humanos, quienes son elegidos por un período de cuatro años, y quienes deben de presentar un informe anual de sus actividades a los Estado Parte y a la Asamblea General de las Naciones Unidas.





00000080

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

El Comité dentro de sus competencias- las cuales sólo se extenderán con las desapariciones forzadas que hayan comenzado con posterioridad a la entrada en vigor de la convención- puede cooperar con todas las instituciones, organismos y oficinas nacionales que obren para proteger a todas las personas de las desapariciones forzadas. Así mismo, el Comité podrá examinar, toda petición presentada por los allegados de una persona desaparecida, sus representantes legales, sus abogados o las personas autorizadas por ellos, a fin de buscar y localizar a esa persona; el comité para conocer tal petición, deberá de asegurar que el solicitante haya presentado denuncia previamente y en la forma debida a los órganos competentes nacionales.

Consecuentemente cada Estado Parte debe de reconocer la competencia del Comité para poder recibir y examinar las comunicaciones presentadas de las personas que alegaren ser víctima de violaciones por ese Estado, el Comité no admitirá ninguna comunicación relativa a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración.

Y por último la tercera parte de la convención menciona que la misma estará sujeta a ratificación, y para el Estado Parte que se adhiera posteriormente a la entrada en vigor de la convención, está entrará en vigor el trigésimo día a partir de la fecha en que ese Estado haya depositado su instrumento de ratificación.

Además menciona que toda controversia que surja entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o aplicación de la presente Convención, que no se solucione mediante negociación o a través de los





00000081

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

procedimientos previstos expresamente en la presente Convención, se someterá a arbitraje a petición de uno de los Estados implicados, y en dado caso en el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de arbitraje, las partes no consiguen ponerse de acuerdo sobre la organización del mismo, cualquiera de las partes podrá someter la controversia a la Corte Internacional de Justicia, mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte.

En conclusión el contenido de la convención brinda estándares generales para la investigación, enjuiciamiento y sanción de personas que podrían ser consideradas responsables del delito de desaparición forzada. Esto, por lo tanto, fortalece las medidas ya existentes en el país, de tal suerte, obliga a que el sistema de justicia cuente con herramientas jurídicas reconocidas por la comunidad internacional. Derivado de ello, el Estado de Guatemala estaría incorporando una garantía de no repetición de las contempladas en el Derechos Internacional.

Trámite en el Organismo Ejecutivo:

El Organismo Ejecutivo suscribió la Convención en febrero del año 2007 en la ciudad de París, en Francia. El Ministerio de Relaciones Exteriores recabó las opiniones de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos –COPREDEH- (16 de febrero de 2007); El Procurador de los Derechos Humanos (27 de marzo de 2007); Fiscalía General de la República Ministerio Público (12 de abril de 2007); Ministerio de Gobernación (17 de abril de 2007); y Ministerio de la Defensa Nacional (25 de abril de 2007) opinando todos la conveniencia de que dicha Convención sea





00000082

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

ratificada por el Estado, en procedencia a la armonía del principio Constitucional de la preeminencia de los derechos humanos.

Tras el análisis de las opiniones vertidas, el Ministerio de Relaciones Exteriores consideró que concluyo que "(...) derivado de los compromisos asumidos en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Guatemala debe adoptar todas las medidas necesarias para armonizar las leyes nacionales con la Convención (...)." Con lo cual remitió copia certificada de la Convención al Cuerpo Consultivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República (26 de noviembre de 2007).

El Cuerpo consultivo de la Secretaría General de la Presidencia de la República luego del análisis estimo que "es procedente remitir a conocimiento del Honorable Congreso de la República, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas, para su aprobación previo a ser ratificado por el Señor Presidente de la República (...)."

El día 27 de noviembre de 2007 el señor Presidente de la República remitió al Honorable señor Presidente del Congreso de la República copia certificada de la Convención para la consideración y aprobación del Honorable Congreso de la República de Guatemala.





00000083

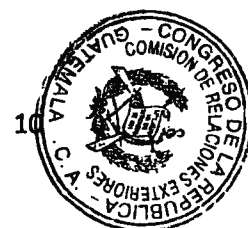
Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Consideraciones Generales:

Guatemala ha reiterado en diversas ocasiones su compromiso con el derecho internacional, ratificando los instrumentos que permiten mantener un alto estándar en protección y, además, adecuar el derecho interno para la protección efectiva de las personas. Esto se ve reflejado en la Constitución Política de la República de Guatemala, la cual protege los derechos fundamentales de las personas y esencialmente, protege los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad. De igual forma, la constitución incorpora una efectiva protección de todos los habitantes del país contra detenciones arbitrarias y no fundadas en derecho, para lo cual también ha contemplado la garantía jurídica de Amparo.

La Comisión de Relaciones Exteriores considera, que el Estado de Guatemala se ha comprometido a no tolerar la práctica de desaparición forzada, atendiendo a su historia y a la consolidación de la paz, por ello es consecuente con la obligación de garantizar los derechos individuales y sociales de las personas. En consecuencia, esta obligación implica el deber de organizar al poder público de manera que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Como parte de ello, el Estado debe prevenir, crear mecanismos de no repetición, proteger a las víctimas cuando estos hechos sucedan e investigar diligentemente en caso la práctica sea denunciada.

En este sentido, prevenir y garantizar la no repetición de hechos de desaparición forzada, conlleva medidas jurídicas, políticas, administrativas y culturales que promuevan la salvaguarda de los derechos humanos. El Estado





00000084

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

por lo tanto, se encuentra en una posición especial de ser el garante de los derechos de las personas que habitan en su territorio. Además, de brindar una efectiva garantía a la comunidad internacional de ser un Estado protector de las personas y la humanidad.

Es consideración de la Comisión de Relaciones Exteriores, que la reciente adhesión de Guatemala al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, además de ser un verdadero avance en materia de No repetición, requiere del Estado medidas que garanticen una efectiva cooperación con dicha Corte, lo cual no solo descansa en la implementación, sino en la incorporación de aquellos instrumentos internacionales que dan vida a la efectiva tutela de la Corte Penal Internacional.

Consideraciones Jurídicas:

La Constitución Política de la República de Guatemala protege a la persona humana y le garantiza, la vida, la libertad, su integridad personal y le reconoce sus derechos de no ser privado de la libertad de forma arbitraria, asimismo de poder contar y utilizar mecanismos de defensa en caso de procesos penales que se sigan en su contra. Por lo tanto, la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas no es contraria a la misma, siendo un instrumento internacional que contribuye jurídicamente al propósito de la paz y la libertad, así como al respeto de los derechos humanos, propiciando mecanismos jurídicos que protegen la dignidad de las personas.





00000085

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

Asimismo el Congreso de la República debe de aprobar la convención ya que la misma afecta leyes vigentes, como es el delito de desaparición forzada regulado en el Código Penal, y la aplicación de la Convención Interamericana de desaparición forzada que se ratifico en mil novecientos noventa y seis; también constituye el reconocimiento de la competencia del Comité Contra la desaparición Forzada para examinar y recibir comunicaciones en que un Estado Parte alegue al Estado de Guatemala que no cumple con las obligaciones que le impone la convención tratada.

Por lo que consecuentemente la convención conlleva clausula de arbitraje al momento en que el Estado de Guatemala tenga controversias con otros Estados Parte con la interpretación y aplicación de la Convención; sin embargo la clausula es aplicable siempre y cuando antes de llegar a ese proceso, se haya agotado las negociaciones entre los Estados en conflicto.

Por último es necesario indicar que respecto a la reserva que sugiere el Ministerio de Relaciones Exteriores, y el cuerpo consultivo de la Secretaría General de la Presidencia no es necesaria, debido a que al momento en que la sugirieron, la convención aún no se encontraba vigente, por lo que era aplicable. Sin embargo el veintitrés de diciembre de dos mil diez el tratado entro en vigencia, con lo cual en la misma convención, -en el artículo treinta y cinco inciso segundo- se menciona que las obligaciones respecto al Comité de desaparición forzada son con posterioridad a la entrada en vigor de la convención para el Estado que se adhiera luego de la vigencia.





00000086

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

De tal cuenta esta Comisión concluye:

Que la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas es un instrumento internacional de alta importancia para el país, que su contribución al mantenimiento de la paz, como mecanismo y garantía de no repetición es de valiosa trascendencia. Asimismo, que en virtud de que su contenido incorpora estándares internacionales para la protección, prevención, seguimiento y fortalecimiento de los sistemas de justicia es de emitir **DICTAMEN FAVORABLE** para que el Pleno del Congreso de la República decida conforme el artículo 171 literal I), de la Constitución Política de la República, la aprobación de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas para que el Estado de Guatemala pueda ratificar y pase a ser Estado Parte de tan importante Convención.

DADO EN LA SALA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL DÍA CUATRO DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

Presidente

Emmanuel Seidner Aguado
Vicepresidente

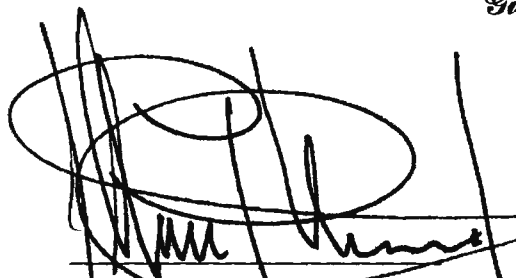
Secretaria

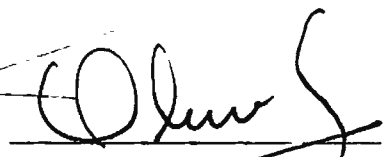




00000087

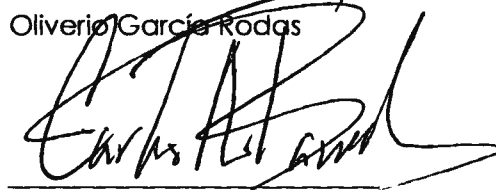
Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.



Manuel Alfredo Villacorta Mirón

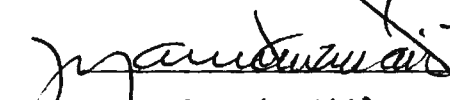

Oliverio García Rodas





Orlando Blanco Lapola


Carlos Barreda Taracena

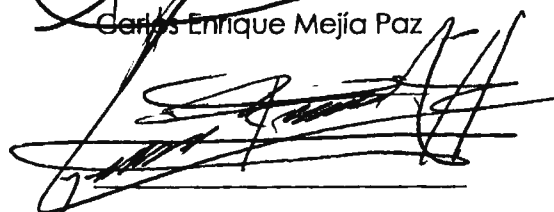

César Emilio Fajardo Morales


Mauro Guzmán Mérida


Julio César López Villatoro


Carlos Enrique Mejía Paz


Amilcar de Jesús Pop Ac


Gudy Rivera Estrada


Valentín Gramajo Maldonado


Emilienne Mazariegos





00000088

Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

DECRETO NÚMERO _____

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que conforme a la Constitución Política de la República, Guatemala normará sus relaciones con otros Estados, de conformidad con los principios, reglas y prácticas internacionales con el propósito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de las instituciones internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados.

CONSIDERANDO:

Que la Convención Americana de los Derechos Humanos, consagra los derechos de las personas estableciendo que se respete la vida, la integridad física, la libertad y la seguridad personal, así como que se le trate con el respeto debido a la dignidad inherente de ser humano.

CONSIDERANDO:

Que el Congreso de la República aprobó la Convención Interamericana sobre la desaparición forzosa en mil novecientos noventa y seis; y se deriva que la





Comisión de Relaciones Exteriores
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

00000089

Convención presente es una normativa actualizada sobre el tema, y con mejores definiciones y procedimientos sobre los derechos al ser humano.

POR TANTO:

En ejercicio de las funciones que le confiere el artículo 171 literal a) y l) de la Constitución Política de la República de Guatemala,

DECRETA:

ARTÍCULO 1. Se aprueba la Convención Internacional para la Protección de todas las personas Contra las Desapariciones Forzadas, suscrito por Guatemala el seis de febrero de dos mil siete.

ARTÍCULO 2 Se reconoce la jurisdicción del Comité contra la desaparición forzada, para actuar conforme a la convención, en el Estado de Guatemala.

ARTÍCULO 3. El presente decreto entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial.

Remítase al Organismo Ejecutivo para su sanción, promulgación y publicación.

Dado en el palacio del Organismo Legislativo, en la ciudad de Guatemala,
____ de ____ de dos mil trece.





Diputado
Valentín Gramajo M.
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

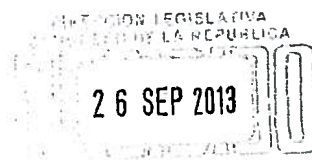
Guatemala, 26 de septiembre de 2013
Ref.:DipVG/0187-2013

Licenciada
Ester Velásquez Sagastume
Dirección Legislativa
Congreso de la República
Su Despacho

Estimada Licenciada Velásquez:

Por el presente medio, me permito solicitarle se sirva tomar nota que, por este acto procedo formalmente a solicitar el retiro de mi firma del Dictamen Favorable de la Iniciativa **3736** de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República, de fecha **4 de julio de 2013**, y asimismo, a que al momento en que se proceda a la lectura del mismo ante el Pleno del Congreso de la República, se considere en cambio, mi voto negativo, razonado por los siguientes motivos:

1. La iniciativa 3736 fue presentada por el Organismo Ejecutivo, en el período de la Sexta Legislatura (2008-2012) con fecha 27 de noviembre de 2007, y la misma de conformidad con el trámite respectivo, fue conocida por el Pleno del Congreso de la República, el 12 de diciembre de 2007, y enviada para dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
2. Consta que sobre la iniciativa de ley en referencia, no ha sido solicitada prórroga para la emisión del dictamen respectivo, y tampoco consta que al momento de instalarse la Séptima Legislatura (2012-2016), se haya reclamado en el plazo de ley, la emisión del dictamen respectivo.
3. De conformidad con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, para rendir dictámenes, las comisiones de trabajo tienen un plazo legal de 45 días hábiles, salvo en el caso de que se justifique una prórroga del mismo, y la misma sea aprobada por el Pleno.





Diputado
Valentín Gramajo M.
Congreso de la República
Guatemala, C. A.

4. De conformidad con el artículo 45 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, habiendo ya transcurrido un período legislativo, sin que la iniciativa de ley identificada,
5. obtuviera dictamen de la Comisión, era procedente considerar la misma como desechada, debiendo haberse procedido a archivar el respectivo expediente.
6. Según he podido verificar, ante el Pleno del Congreso de la República de la presente legislatura, dentro del plazo de los primeros 60 días de instalada la misma, ningún Diputado, solicitó la emisión del dictamen correspondiente.
7. En virtud de lo anterior, la iniciativa de ley en referencia se debe considerar legalmente como desechada, y en consecuencia ordenar su correspondiente archivo
8. Por las razones anteriores, considero que el Dictamen Favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores, de fecha 4 de julio de 2013, entregado a esa Dirección Legislativa con fecha 22 de agosto de 2013, no debió poder ser emitido, y por eso solicito considerar el retiro de mi firma del mismo.

En consecuencia de lo anterior, como miembro de esa Comisión, solicito se razone mi voto en contra en el Dictamen favorable relacionado.

Atentamente,


C. Valentín Gramajo M.
Diputado de Bancada Partido Patriota



cc/Archivo/lmq

